

Necesidad de una convergencia política

Raúl Alfonsín
(*Ex-Presidente de la República de Argentina*)

Sabemos que estamos viviendo una etapa de transición. Por voluntad de la mayoría, un ciclo ha terminado. Un ciclo largo que hemos definido reiteradamente como de decadencia económica, institucional y moral. Lo que nace y lo que muere se entrecruzan: el cambio coincide con la crisis de la que intentamos salir, seguramente la más grave y profunda de este siglo, y lo que buscamos implantar es la democracia como forma de gobierno pero también como forma de vida, como sistema político, como estilo de convivencia entre los hombres. No habremos triunfado hasta que estas dos dimensiones se hayan hecho una, hasta que las rutinas del autoritarismo que marcaron nuestras vidas sean transformadas por las rutinas de la democracia.

En una palabra: hasta que ésta no descanse solamente en las formas institucionales sino que penetre en la íntima conciencia de cada uno.

En este sentido, la crisis no es sólo un obstáculo, la comprobación de la enfermedad en un cuerpo sano (un bloqueo económico y social para una empresa de modernización). En su remoto origen lingüístico, crisis significa también discriminar y decidir. Debemos rescatar el momento productivo de la crisis como estímulo para la capacidad de elegir entre alternativas. Más aún: las crisis estallan precisamente porque los hombres y los pueblos son capaces de erigir proyectos alternativos a las situaciones de injusticia y de decadencia. Ellas no son un fenómeno de la naturaleza sino una producción de la historia.

Las crisis llevan en sí la potencialidad del cambio. Marcan los momentos de emergencia de nuevas demandas, de nuevos proyectos de vida, de nuevos actores sociales y de recuperación de la iniciativa y de la capacidad de invención colectiva.

Es la elección por la alternativa de la democracia lo que provocó la crisis del autoritarismo. Pero —según hemos dicho— la democracia remite a dos niveles. Es por un lado un procedimiento ciudadano sobre el que se basa un orden político. Y es, por el otro, un espacio —el único legítimo— para adoptar proyectos de transformación social.

Ambas dimensiones, aunque no estén históricamente fusionadas, deben llegar a complementarse. Si la democracia no es capaz de amparar procesos transformadores —procesos que en la América Latina de hoy se resumen en el imperativo de modernizar al país sin abdicar de una ética de la solidaridad— fracasará también, inevitablemente, como procedimiento, como régimen político.

Para superar nuestras dificultades, resulta imprescindible elaborar una voluntad democrática moderna, que esté a la altura de la necesidad de transformación, formal y sustantiva, que reclaman los tiempos.

Por cierto que no partimos de cero. Si bien es verdad que los grandes sistemas ideológicos están en crisis, es verdad también que esa crisis libera elementos parciales que aceptan una recomposición en un nuevo consenso integrador. Pensamos en una síntesis que recupere lo mejor de las grandes tradiciones políticas y que, al hacerlo, sea capaz de constituir una nueva voluntad colectiva que sea algo más que una suma de programas parciales. Esta voluntad democrática colectiva no implica uniformidad: significa un piso común de creencias capaces de contener dentro de sí al pluralismo y a la diversi-

dad. Al transformar diferentes problemas planteados por variadas ideologías en temas comunes, una nueva voluntad democrática se consolida porque es capaz de penetrar, como un lenguaje compartido, en la mayoría de las propuestas políticas y sociales, respetando su particularidad.

En esta etapa de transición, en este momento fundacional, parece no sólo legítimo sino también indispensable recuperar y resignificar esos valores heredados. Pero es también cierto, sin embargo, que un consenso democrático moderno no puede contentarse con rearticular contenidos provenientes de concepciones anteriores. Debe también incorporar otros productos de nuestra contemporaneidad, surgidos más recientemente.

Las sociedades modernas asisten a procesos de creciente diferenciación y complejidad sociales. Emergen nuevos sujetos, portadores de nuevas demandas, de nuevos temas de convocatoria. Ellos también deberán tener su lugar en el emprendimiento común.

América Latina transita decididamente los caminos de la democracia. Ha costado acceder a ella, como lo muestran los padecimientos y obstáculos que hemos debido atravesar para alcanzarla, y costará sin duda afianzarla definitivamente, ya que la hemos conquistado en medio de terribles limitaciones y problemas de orden económico, social y político. Algunos de ellos heredados de nuestra historia reciente, otros provenientes del proceso global de crisis y transformaciones profundas que vive el mundo en la hora actual. Nuestra democracia no es débil, en la medida en que cuenta con medios y voluntades para sostenerse. Pero tampoco es aún una democracia consolidada, puesto que no se ha logrado todavía que la adhesión espontánea del ciudadano a su vigencia se traduzca en la interiorización de hábitos de convivencia política que hagan literalmente inconcebi-

ble cualquier sueño de involución autoritaria. He aquí, una tarea que debe ser asumida y para la cual son necesarias iniciativas específicas.

Dicho esto, sin embargo, es preciso tener en cuenta que la consolidación de la democracia sólo define el marco para encuadrar un conjunto determinado de objetivos. Esos objetivos se resumen en el logro de una sociedad moderna, participativa y solidaria.

Nuestra historia en casi todo lo que va del siglo XX, es la de países cuyas relaciones sociales no han estado sujetas a un pacto de convivencia. Cabría decir que la democracia no debe ser restaurada sino construida en nuestra región.

Pero, cuando hablamos de construcción de la democracia no nos estamos refiriendo a una simple abstracción; nos estamos refiriendo a la fundación de un sistema político que será estable en la medida en que se traduzca en la adopción de rutinas democráticas asumidas y practicadas por el conjunto de la ciudadanía.

Las normas constitutivas de la democracia presuponen y promueven el pluralismo y, por lo tanto, la pacífica controversia de propuestas y proyectos acerca de la sociedad que anhelamos. Objetivos cuya síntesis cabe en la fórmula de una sociedad moderna participativa y éticamente solidaria, constituyen en ese sentido uno de tales proyectos. Tenemos, sin embargo; la convicción de que no se trata de un proyecto más; de que, sin perjuicio de ser discutido, corregido, perfeccionado, posee una capacidad convocante que excede, por sus virtualidades propias, los puntos de vista particulares de un sector, de una corporación e incluso de una agrupación partidaria.

Sin duda, esa capacidad ha de ponerse a prueba. Tal es, al fin y al cabo, el principal motivo de una convocatoria impostergable. De ser escuchada, habrá de afirmar-

se bajo la forma de convergencia de fuerzas políticas y de concertación entre las organizaciones sociales.

En sus términos más sustantivos, esta convocatoria implica una propuesta de reformas específicas a nivel económico, político, social, cultural e institucional, que deberán, como es natural, ser precisadas y desarrolladas oportunamente con el concurso de cuantos quieran sumarse al proyecto.

Permítanme una pequeña digresión, con referencia a mi partido, la U.C.R. de la Argentina. El radicalismo completó la primera modernización del país con la incorporación de la ciudadanía a la vida política.

Su convocatoria no se redujo, sin embargo, a la mera aplicación de las reglas constitucionales en plenitud y a la vigencia del sufragio universal y secreto. Una concepción ética de la política y un profundo sentido de la justicia social se sumaron a la propuesta democrática, en términos no excluyentes de ningún sector y aparentemente desligados de las grandes líneas ideológicas que desde hacía dos siglos canalizaban las inquietudes sociales y políticas de los países de Occidente. Por cierto que el radicalismo era una fuerza renovadora y opuesta al conservadorismo, pero no se definió como liberal o socialista, ni tendió a reflejar algunos de los matices intermedios de estas dos opuestas posiciones.

Fue en su modo de actuar un partido de síntesis, un partido donde las reivindicaciones y principios de la libertad, el progreso y la solidaridad social encontraron un cauce abierto. Por ello recibió frecuentes críticas de los partidos dogmáticos y se le imputó no pocas veces vaguedad ideológica y falta de rigor teórico. La ironía de la historia ha permitido que esa supuesta ambigüedad sea hoy una de sus mayores riquezas, pues si algo caracterizó al radicalismo en su casi un siglo de existencia es el sentido ético de la política y su adscripción a ultranza

al sistema democrático. Estos dos valores constituyen el punto de arranque de quienes intentan en el mundo contemporáneo, desde la perspectiva de las grandes corrientes políticas históricas, superar las dicotomías que tuvieron sentido o funcionalidad en el pasado pero que ya no se corresponden con los profundos cambios sociales y económicos de la segunda revolución industrial.

Valores que eran definidos por liberales o socialistas y las diversas posiciones intermedias, sin excluir al conservadorismo lúcido y al social-cristianismo, quedaron incorporados a la cultura, a la práctica política y a las instituciones de la mayor parte de Occidente. Las involuciones totalitarias fueron superadas en esa área del mundo luego de la Segunda Guerra Mundial, en un proceso que arrancó de la derrota del nazi-fascismo y que culminó con el derrumbe de los regímenes autoritarios en España y Portugal y el fracaso de la aventura de los coroneles griegos. En América Latina, cuyas naciones surgieron a la vida independiente bajo la inspiración de las ideas democráticas y progresistas, la amenaza autoritaria continúa aún presente, pero en los últimos años se está desarrollando un proceso generalizado de democratización. Nuestros pueblos son conscientes, cada vez más, de que ni el desarrollo económico ni la democracia pueden ser el privilegio de algunos pocos pueblos elegidos.

Se debe provocar la síntesis, suscitar la modernidad, abrir el futuro. Los valores y las metodologías políticas rescatables y todavía vigentes del pasado, tanto internacionales como nacionales, deben encontrar una síntesis armoniosa y superadora, en consonancia con las nuevas exigencias y los nuevos problemas que se plantea la humanidad.

Todas deben sumarse con su aporte a esa búsqueda colectiva de la humanidad para delinear los marcos éti-

cos, políticos y organizativos de su futuro. Debe quedar bien en claro que el rechazo del dogmatismo y de las concepciones mecanicistas y deterministas decimonónicas no abre paso a la vaguedad sino a la concreción, a la racionalidad y a la experimentación consciente de nuevas fórmulas de convivencia entre los hombres.

El rechazo de las concepciones dogmáticas y sectarias nos permitirá estar en condiciones óptimas para asumir y encarnar con flexibilidad las exigencias de la sociedad en transformación, de la sociedad que marcha hacia una nueva etapa productiva y organizativa.

Esta flexibilidad no se contrapone al rigor, sino que lo exige, pero es el rigor de los principios de la investigación, de la búsqueda racionalmente orientada, del estudio abierto y valiente.

Pero, además, debemos facilitar el surgimiento de las nuevas ideas, de los nuevos estilos y de las nuevas propuestas que la sociedad necesita para orientar su marcha al futuro, a fin de que se incorporen a la empresa común todos aquéllos que sientan y comprendan que ha comenzado un nuevo siglo de nuestra historia y de la historia de la humanidad.

Nuestra propuesta de modernización implica la integración y la participación de todo el pueblo.

Sin solidaridad no se construye ninguna sociedad estable y el primer deber que nos impone la ética de la solidaridad, es incorporar al trabajo común a todos aquéllos que, sin renegar de su historia, se sientan convocados por un proyecto como el que hemos definido.

Pensamos en primer término en quienes fueron condenados por políticas injustas a la miseria y a la marginalidad.

Pensamos también en las jóvenes generaciones que han sufrido el enclaustramiento de una educación auto-

ritaria y la falta de oportunidades y se integran hoy a la vida política con su impulso decidido y su energía vital dispuestos a construir un mundo nuevo.

Pensamos además en quienes fueron desplazados de la vida política efectiva por la marcha de la historia, herederos de los ideales y ambiciones que guiaron a buena parte de los hombres que en las últimas décadas del siglo pasado comenzaron la edificación de la América Latina moderna.

En quienes enaltecieron hasta el límite el valor de la libertad como el máspreciado por encima de cualquier doctrinarismo económico.

En quienes son herederos de la acción ejemplar del socialismo humano, democrático y ético.

En quienes buscaron conjugar su creencia religiosa con la construcción de un mundo inmediato mejor para los hombres y que no han logrado incorporar ese noble ideal a la práctica política concreta de vastos sectores sociales.

América Latina debe emerger de su prolongada crisis con vigor; y este vigor encontrará su alimento en la decisión de participar de todos los componentes de la sociedad: los responsables de interpretar y representar las necesidades y aspiraciones de los distintos sectores sociales, deben asumir con firmeza y vocación de servicio esta exigencia. Debemos aprender a unirnos y a sumar el trabajo de cada uno con el del otro y crear así la transformación y lo nuevo. Es la unión de lo que cada uno de nosotros produce desde su lugar.

El discurso político debe llegar con este nuevo espíritu de construcción a todos. Estamos dispuestos a marchar juntos. Debemos lograr la unión de lo desunido. Debe tratarse de una disposición, de una voluntad, pero también de un compromiso para alcanzar la concreción de las ideas en la vida real de las personas.

Entre todos debemos librar una verdadera batalla. América Latina no puede admitir una división económica del mundo entre centro y periferia, entre Norte desarrollado y Sur subdesarrollado, como realidad inmodificable. Sostiene, por el contrario, que la persistencia o el incremento de tal situación derivará en conflictos y tensiones que pondrán en peligro la misma prosperidad y seguridad de los países desarrollados y centrales.

No basa esta posición en una simple comprobación práctica o estratégica. Proclamará, en cambio, la injusticia de la existencia de pueblos ricos y pueblos pobres, y de las prácticas discriminatorias de los países desarrollados, inadmisibles desde el punto de vista ético e insostenibles para las naciones que profesan la democracia y la libertad como valores orientadores de su organización interna. América Latina debe proponerse un proyecto de desarrollo que le permita escapar tanto de la marginalidad como del criterio de la complementariedad subordinada.

La profunda brecha tecnológica que la separa de los países más avanzados, y de otros nuevos polos de desarrollo que están surgiendo en la Cuenca del Pacífico, debe ser superada mediante una incorporación racional de modernos sistemas de producción, información y organización de la economía, en el marco de una integración latinoamericana que asegure áreas geográficas y poblacionales de magnitud suficiente para ese desarrollo.

Este proyecto de construcción de una región moderna y desarrollada, incorporada digna y creativamente al sistema económico internacional a través de la integración regional, no será la obra, en cada país, de un gobierno ni de un partido, ni podrá ser impuesto desde el Estado. A su concreción deben concurrir todos los sectores de la sociedad para evitar que continúe un proceso de deterioro caracterizado por un orden económico internacional injusto que no es a la larga sostenible.

La necesidad de modificación no sólo debe ser impulsada por los países relegados, sino que además debe ser admitida como una necesidad ética, práctica y política por los países adelantados. No queremos ser los nuevos bárbaros en las fronteras de un nuevo imperio, y los imperios deben recordar y meditar sobre cómo han terminado sus relaciones con los bárbaros.

Tenemos la voluntad de participar creadora y activamente en la construcción de una humanidad mejor, más equitativa y más libre. No renunciaremos a ese derecho y lo defenderemos para todos los pueblos del mundo.

La integración política y económica de América Latina ha sido un proyecto tantas veces proclamado como enterrado en el cajón de los recuerdos. Y sin embargo, nadie podría afirmar hoy —con argumentos razonables—, que alguna de nuestras naciones se desarrollará y alcanzará la prosperidad si en sus fronteras coexisten vecinos pobres y explotados.

Debemos aspirar a que la integración latinoamericana deje de ser un enunciado que nunca termina de cumplirse. Creemos que ya hemos encarado pasos concretos para tal fin, porque en definitiva es la acción común la que integra. Y no las palabras. El Consenso de Cartagena creó un ámbito de trabajo solidario: el Grupo de Contadora y de Apoyo fue otro paso en la misma dirección. El acuerdo comercial entre Argentina, Uruguay y Brasil significó otro salto hacia ese objetivo. En poco tiempo hemos alcanzado un espacio que hasta ayer no poseíamos; hemos traducido en cosas tangibles lo que hasta ese momento no dejaba de ser una expresión de deseos. Y aún no estamos conformes. ¿Cómo podríamos estarlo si sólo hemos dado los primeros pasos? Luchamos contra dos siglos de desencuentros regionales, de trabas comerciales y competencias absurdas. Mientras otras regiones nos daban ejemplos de inteligencia y unificaban sus in-

tereses políticos y comerciales para formar sólidos frentes, nosotros proseguíamos con el sórdido provincialismo de encerrarnos en nuestras fronteras y erigir, ante nuestros vecinos, murallas que nos impedían crecer. Mientras otros abrían sus fronteras, nosotros nos mirábamos con desconfianza.

El mundo se ha dividido hoy en grandes espacios regionales en donde el desarrollo económico depende cada vez menos de un país en particular, y cada vez más de la integración regional. La Comunidad Económica Europea es un ejemplo; también lo es Estados Unidos, convertido ya en un espacio regional, y también la Unión Soviética. Porque en cada uno de ellos existe una escala de mercado de gran magnitud debido, entre otras cosas, al tamaño de su población. En América Latina necesitamos crear un sistema que facilite la integración de nuestras posibilidades: relaciones firmes entre las monedas de cada país, un intercambio comercial libre, un conjunto de normas jurídicas compartidas y una voluntad común de conformar una región fuerte, que fije las reglas de juego de acuerdo con sus propios intereses.

Sin aspiraciones hegemónicas de nadie, sin falsas competencias, hemos creado condiciones para la cooperación regional. Y ahora debemos afianzarlas mediante nuevas y más audaces acciones. Una de ellas bien puede ser la redefinición de la representación y funciones del Parlamento Latinoamericano, al que concurren legisladores especialmente designados por sus propios Congresos, fortaleciendo la misión de establecer bases políticas sólidas de integración mediante el desarrollo regional conjunto en las áreas de la educación, la salud, la economía, la ecología, el aprovechamiento de los recursos humanos y geográficos.

Debemos avanzar juntos porque de ello depende nuestra fortaleza. Algunos aducirán que se trata de

compartir la pobreza que caracteriza a nuestro continente. Nada de eso. Se trata de unir la imaginación para que juntos demostremos al mundo que unidos y solidarios vamos a transformar la historia y a hacer valer las riquezas tanto tiempo postergadas.

El tríptico formado por la democracia participativa, la ética solidaria y la modernización de las estructuras sociales constituye una base sólida para un proyecto que podemos adoptar mancomunadamente sectores políticos y sociales diferentes. La convocatoria que propugnamos consiste en un llamado para que cada sector analice los elementos comunes entre este proyecto y su propio programa partidario o sectorial. En relación a los puntos en que haya coincidencia es necesario trabajar juntos para materializarlos a través de un esfuerzo compartido y solidario. Respecto de los puntos en que hay divergencia, habrá que continuar con el debate reflexivo y racional dentro del marco que proporciona el sistema democrático.

Se abre una nueva etapa en América Latina. Una etapa en la que se pondrá a prueba nuestra capacidad de construcción, de creación de una región distinta. Venimos advirtiendo desde los comienzos de este camino en libertad, que estamos protagonizando una circunstancia histórica inédita: de nuestra vida como pueblo, que tiene como pocas veces en su joven pero desgarrada historia la responsabilidad de decidir su destino.

Hemos ido superando tremendas dificultades y obstáculos fabulosos en estos años de democracia. Hemos trabajado conscientes de la urgencia y la perentoriedad de las demandas de una sociedad lastimada y sumida en la destrucción y el oscurantismo; nuestros pueblos han demostrado ante el mundo su voluntad decidida de participación, su madurez y su coraje para salir definitivamente del atraso y el autoritarismo bajo todas sus for-

mas. Seguiremos ocupándonos incansablemente de solucionar los problemas de la América Latina vieja, pero lo haremos en la certeza de que así estamos abriendo paso a la América Latina nueva.

Este es precisamente el enorme desafío de la hora: tomar conciencia del momento histórico, fundacional que nos ha tocado vivir y asumirlo, no como espectadores, sino como protagonistas y hacedores concretos del camino que sigue. Y el camino que sigue —el camino de la transformación en libertad y con crecimiento, el camino de la modernización conjugada con la ética de la solidaridad en el marco de una democracia participativa—, ese camino es el que la dirigencia tiene hoy la posibilidad y la responsabilidad de trazar en sus hitos concretos.

Porque como alguna vez lo señalara Ortega y Gasset: *Tenemos el deber de presentir lo nuevo. Tengamos entonces también el valor de afirmarlo.* Para afirmarlo, debemos estar dispuestos a marchar juntos, y éste es un mensaje directo y contundente —una nueva enseñanza, si se quiere— que el pueblo (la sociedad en su conjunto, y en especial quienes más sufren) le está ofreciendo y enviando a todos sus dirigentes. Nos dice que es necesario unir voluntades, juntar fuerzas, mentes y brazos para salir del pantano: *Dejen sus divergencias ideológicas para más adelante y converjan en un esfuerzo común para empujar juntos hacia un futuro mejor.*

Todos están trabajando para hacer posible ese futuro que será un presente digno para nuestros hijos, y los dirigentes políticos debemos ponernos a la altura de tan trascendente circunstancia. Cada uno debe por cierto seguir transmitiendo desde las tribunas de pensamiento y acción los reclamos y demandas, las críticas y el inconformismo legítimo de quienes no poseen razones ni tiempo para sentirse satisfechos por lo que hasta ahora

se ha hecho. Son enormes las urgencias acumuladas y vienen desde hace décadas, por lo que harán falta años de esfuerzo y ni aún así podremos estar plenamente satisfechos por lo realizado. Por ello es deber del político ser portavoz de las demandas insatisfechas de una sociedad largamente postergada, pero nunca quizás como ahora dicho papel debe ser complementado con la necesaria propuesta en acción concreta para solucionar el problema que es destacado. A cada crítica le debe seguir la propuesta. A cada reclamo una alternativa de respuesta.

El ordenamiento democrático precisa entonces del concurso de todos desde su lugar de trabajo y desde su respectivo grado de responsabilidad para hallar marcos de acción común tanto en la distribución de los recursos como en la generación de los mismos. Reglas de convivencia, valores consensualmente aceptados, cursos de acción compartidos hacen a la esencia de esta etapa forjadora que estamos transitando, con miras a un horizonte abierto que ya se está vislumbrando.

El llamado a una convergencia de fuerzas políticas y a la concertación de fuerzas sociales en el marco de un pacto democrático fundante de esta nueva etapa no hace más que interpretar el anhelo y las expectativas centradas por la sociedad en el presente momento histórico. Para encarar estos desafíos se precisa de una nueva capacidad colectiva de cooperación y participación, dispuesta a remover antiguas taras, estructuras injustas y comportamientos caducos. Hacen falta transformaciones profundas y estamos dispuestos a llevarlas adelante, con la voluntad popular decidida a realizarlas y apoyarlas. Pero hemos aprendido muy bien a no confundir este proceso de cambio con una regresión hacia un pasado de desencuentro, de odio, violencia y terror. Estas reformas estructurales acompañadas de un cambio en la mentalidad colectiva tienen el carácter de un salto hacia

el progreso que todos y cada uno, codo a codo, deben vivir y sentir como propio. La empresa colectiva que se inicia, la construcción de la América Latina moderna, debe dar así un sentido reparador, superador y profundamente humanista a nuestras jóvenes generaciones, que advienen a la madurez con un horizonte afortunadamente más claro que el de aquéllas que las precedieron.

Vamos por ello a hacer de nuestra voluntad un motor de actos creativos y realidades fundantes. Pero esta vez el llamado no es al voluntarismo abstracto. En un pasado no lejano se apeló a esta suerte de voluntarismo para el cambio violento, se manipularon las conciencias y en definitiva se culminó haciendo la apología de una violencia totalitaria contraria al idealismo genuino de muchos jóvenes. Por otro lado, el abandono de nuestra voluntad en el ejercicio de nuestros derechos permitió el avasallamiento de nuestras instituciones y el establecimiento de una violencia también atroz dirigida desde el mismo Estado, como producto de la voluntad de unos pocos en el ejercicio irracional del poder.

Hoy encontramos en la búsqueda de la realización personal en el marco de la convivencia pacífica y plural, a la voluntad asociada con la racionalidad. Y ahora sí—sin soberbia pero con osadía e imaginación— podemos decidir por nosotros mismos e ir plantando a paso firme y sosteniendo las semillas de una sociedad distinta, de una sociedad mejor.

En cada país, *Lo nacional* somos nosotros: hombres y mujeres que se reconocen desde la diferencia y la pluralidad como parte de una misma comunidad, un sentimiento común de pertenencia y una voluntad concreta de querer vivir juntos y queremos y realizar juntos objetivos comunes. Esta es la nación que queremos y que estamos forjando. Una nación nueva, construida por su

pueblo, que rescata sus valores fundacionales y los redefine para proyectarlos hacia un futuro distinto. Una nación que resurge y se integra a la región para trabajar junto a sus hermanas del continente por una inserción plena y digna en el mundo y por un nuevo orden internacional, más justo y más pacífico.

Luego de muchos errores, de muchos fracasos y de mucha arrogancia, hemos retomado los rumbos de la racionalidad y de su desarrollo integral y armónico.

La etapa del fracaso y de los proyectos errados e imposibles ha terminado para siempre.

La alternativa al estancamiento y a la disolución es la de la democracia y la modernización, encaradas como proceso indisoluble por una sociedad que en pluralismo, solidaridad y participación inicie con seriedad la solución de los problemas que la aquejan, delineando así el verdadero proyecto nacional, abierto y flexible, sin falsas retóricas ni soberbias inconducentes.

Los proyectos propuestos en el pasado obedecían a veces a las concepciones rígidas y cerradas que predominaron en las ideologías y prácticas políticas heredadas del siglo pasado. Los cambios que se han venido produciendo en el mundo derivaron, en las naciones avanzadas, en la adopción de criterios más flexibles, de estrategias más abiertas. La adaptación a la nueva revolución tecnológica sigue produciendo cambios fundamentales en el pensamiento político y en la administración de las economías de aquellos países, tanto en los de sistema pluralista como en los centralizados. Mientras tanto, entre nosotros, persisten los que se aferran a los esquemas del pasado. Es una nueva forma de la dependencia cultural. Están en los hechos consumiendo los residuos obsoletos de ideologías que en los países avanzados ya nadie respeta como dogma indiscutible.

En este terreno también se evidencia el atraso, un atraso cultural que debemos superar para encarar con eficacia los desafíos del presente.

El nuevo proyecto no puede pretender encerrar la realidad en esquemas rígidos que son siempre superados o anulados por el devenir concreto de los acontecimientos.

La convergencia, no debe limitarse a la actividad de los partidos políticos, o los cuerpos colegiados.

Los ciudadanos, en tanto usuarios, consumidores, productores, trabajadores, empresarios, técnicos, etcétera, no pueden permanecer ajenos a decisiones que originan consecuencias significativas sobre la calidad de su vida y sobre el funcionamiento, las metas y los valores de la sociedad.

Esta participación debe ser entendida y encarada como una profundización del sistema democrático y de sus reglas y no como una limitación de los derechos y garantías básicas del mismo, incluido el de la propiedad. Por el contrario, es esa participación la que preservará los derechos fundamentales.

Una sociedad cabalmente democrática no puede incluir en su seno áreas de actividad estructurada sobre valores ajenos a los principios de libertad y de igualdad, entendidos en democracia como los polos de una tensión constructiva para el bien común.

Mayor participación es mayor gobernabilidad. La intensificación de la democracia, su extensión a todos los ámbitos del quehacer social, constituye el único camino válido para enfrentar lo que algunos teóricos han dado en llamar la *ingobernabilidad* de las modernas *sociedades de masas*.

La eventual ingobernabilidad deriva del intento de mantener a grandes capas de la población al margen de

la participación en la toma de decisiones. Los ciudadanos se vuelven *ingobernables* cuando se sienten instrumentos pasivos de decisiones que adoptan otros, cuando las dirigencias de cualquier clase se les oponen como élites cerradas y autónomas, cuando son convertidos en *masa*. El ejercicio de la democracia debe descender de los niveles restringidos de la decisión gubernamental a la vida cotidiana.

Debe convertir a todos los ciudadanos en sujetos activos. Las decisiones deben ser asumidas como la resultante de una participación que se articula desde los niveles más elementales hasta los superiores a través de un mecanismo ininterrumpido de participación, discusión y control.

La sociedad participativa no es una sociedad anárquica ni caótica. Es, por el contrario, la única sociedad funcional y organizada, la única compatible con la preservación de los valores básicos que la democracia ha instaurado y la única que evitará los riesgos de la *ingobernabilidad*. Es la sociedad que supera las viejas antinomias de lo estatal y lo privado en el espacio común de lo público. Es la única sociedad que nos permitirá escapar a la acechanza de las involuciones autoritarias y avanzar hacia la modernización de estructuras para el desarrollo, la autonomía y la integración.